



## **COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES**

D. JOSÉ GIMÉNEZ CERVANTES, Secretario del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, en uso de las competencias que le otorga el artículo 40 del Reglamento de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre,

### **CERTIFICA:**

Que en la Sesión nº 08/01 del Consejo de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones celebrada el día 22 de febrero de 2001, se ha adoptado el siguiente

### **ACUERDO**

Por el que se aprueba la:

#### **CONTESTACIÓN A LA CONSULTA PRESENTADA POR EL INSTITUTO DE FOMENTO DE ANDALUCÍA SOBRE LAS OBLIGACIONES DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. RELATIVAS AL SUMINISTRO DE LÍNEAS DE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS**

#### **I. OBJETO DEL ACUERDO**

El presente acuerdo tiene por objeto el análisis de la consulta relativa a las obligaciones de Telefónica de España, S.A.U. (en adelante, Telefónica) realizada por la Gerencia Provincial de Cádiz del Instituto de Fomento de Andalucía ante la Jefatura Provincial de Telecomunicaciones de Cádiz, y que fue remitida a esta Comisión por la Subdirección General de Evaluación y Calidad de los Servicios de Telecomunicaciones de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información.

#### **II. DELIMITACIÓN DEL CONTENIDO MATERIAL DEL ESCRITO**

La citada consulta se dirige a obtener de esta Comisión información sobre las obligaciones de Telefónica de España, S.A.U. relativas al suministro de líneas de la Red Digital de Servicios Integrados a una empresa en la



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

provincia de Cádiz, y sobre los requisitos, en su caso, que habría de cumplir dicha empresa para obtener dicho suministro.

Para la resolución de la consulta formulada, ha de delimitarse en primer lugar la competencia de esta Comisión para responder a la misma, y en segundo término (si la consulta se hallase en el ámbito de dicha competencia), se ha de determinar en qué términos habría de ser contestada.

### III. COMPETENCIA DE LA COMISIÓN

Las cuestiones que son objeto del escrito presentado se refieren a la interpretación de la normativa relativa a las obligaciones de carácter público que recaen sobre Telefónica de España, S.A.U. en el ámbito de los servicios de telecomunicaciones, comprendida en la Ley 11/1998, de 24 de Abril, General de Telecomunicaciones (en adelante, LGTel), y en particular en el Reglamento de desarrollo del Título III de la Ley General de Telecomunicaciones, en lo relativo al servicio universal de telecomunicaciones, a las demás obligaciones de servicio público y a las obligaciones de carácter público en la prestación de los servicios y en la explotación de las redes de telecomunicaciones, aprobado por Real Decreto 1736/1998, de 31 de julio (en adelante, Reglamento de Obligaciones Públicas o ROP).

Conforme al artículo 29.2.a) del Reglamento de esta Comisión, aprobado por Real Decreto 1994/1996, de 6 de septiembre, en desarrollo de la Ley 12/1997, de 24 de Abril, de Liberalización de las Telecomunicaciones, es función de la misma:

- a) *Resolver las consultas que puedan formularle los operadores de redes y servicios de telecomunicación y las asociaciones de consumidores y usuarios de estos servicios.*

Teniendo en cuenta que dicha consulta ha sido planteada a esta Comisión por el Instituto de Fomento de Andalucía, Ente de Derecho Público adscrito a la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía<sup>1</sup>, ha de tomarse en consideración lo establecido en el artículo 4.1 de la Ley 30/1992, de

<sup>1</sup>

El artículo 1.1 de la Ley del Parlamento Andaluz 3/1987, de 13 de Abril, de creación del Instituto de Fomento de Andalucía, establece lo siguiente:

*En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al amparo de lo que establece el art. 6.1.b) de la Ley 5/1983 de la Hacienda Pública, se crea, por la presente Ley, el Instituto de Fomento de Andalucía, Ente de Derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propios.*



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común:

*Las Administraciones Públicas actúan y se relacionan de acuerdo con el principio de lealtad institucional y, en consecuencia, deberán:*

*c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias.*

Con carácter general, ha de entenderse que las consultas a las que se refiere el artículo 29.2.a) del Reglamento de esta Comisión y el artículo 4.1 c) de la citada Ley 30/1992 pueden referirse, principalmente, a los siguientes ámbitos:

- las normas que han de ser aplicadas por la Comisión;
- los actos y disposiciones dictadas por la propia Comisión;
- las situaciones y relaciones jurídicas sobre las cuales ha de ejercer sus competencias la Comisión.

Teniendo en cuenta este criterio general, puede entenderse que la consulta planteada se encuentra en el ámbito previsto en los citados preceptos, por referirse a normas -la Ley General de Telecomunicaciones y el Reglamento de Obligaciones Públicas- cuya aplicación corresponde a esta Comisión, conforme a las competencias que le son atribuidas por las leyes. Por todo lo cual puede concluirse que es competencia de esta Comisión resolver la consulta que es objeto del presente acuerdo.

### IV. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS

La resolución sobre la consulta planteada por el Instituto de Fomento de Andalucía exige el análisis sistemático de las cuestiones suscitadas en la misma. En particular, ha de determinarse si la prestación de los servicios de red digital de servicios integrados se encuentra en el ámbito de las obligaciones de carácter público que recaen sobre Telefónica de España, S.A.U. y, en caso afirmativo, cuales son los elementos y requisitos de esta obligación conforme a la normativa vigente.

**a) Consideración de los servicios de Red Digital de Servicios Integrados en el ámbito de los "servicios obligatorios"**



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### **establecidos en el artículo 40.2.b) de la Ley General de Telecomunicaciones**

En el escrito de remisión a esta Comisión por la entonces Secretaría General de Comunicaciones de la consulta planteada por el Instituto de Fomento de Andalucía, se invoca el artículo 7.1.a) del Reglamento de Obligaciones Públicas. El citado precepto señala lo siguiente:

*Artículo 7. Obligaciones de servicio público de carácter general.*

1. *En la prestación de los **servicios que lleven aparejados obligaciones de servicio público**, sin perjuicio de lo establecido en el Título II para cada modalidad de obligación, los operadores deberán cumplir las siguientes obligaciones:*
  - a. ***Garantizar el acceso a los servicios de todos los usuarios que lo soliciten del grupo o territorio al que afecte el título habilitante correspondiente.***

Efectivamente, para poder contestar debidamente la cuestión planteada, es preciso determinar de qué modo se refiere la normativa sobre "servicios obligatorios" a la prestación del servicio RDSI por Telefónica, para poder determinar seguidamente si éste servicio "lleva aparejado obligaciones de servicio público", y si es así, cuales son estas.

A tal efecto ha de tenerse en cuenta lo establecido en el artículo 40 de la Ley General de Telecomunicaciones, relativo a los "Servicios obligatorios de telecomunicaciones", y en particular en su apartado 2.b):

1. *El Gobierno, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y mediante norma reglamentaria, **podrá incluir determinados servicios de los previstos en el apartado 2 de este artículo, en la categoría de servicios obligatorios a la que alude el artículo 36.b)***<sup>2</sup>
2. *Podrán incluirse en esta categoría de servicios: (...)*
  - b) *Los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento o de transmisión de datos, los avanzados de telefonía disponible al público, **los de red digital de servicios integrados** y los que faciliten la comunicación entre determinados colectivos que se encuentren en circunstancias*

---

<sup>2</sup> *Artículo 36. Categorías de obligaciones de servicio público*  
*A efectos de lo dispuesto en esta Ley y sin perjuicio de las obligaciones recogidas en el artículo 35, se establecen las siguientes categorías de obligaciones de servicio público: (...)*  
*b) Los servicios obligatorios de telecomunicaciones, que se prestarán en todo o parte del territorio nacional, con arreglo a lo determinado en la Sección III de este Título. (...)*



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

especiales y estén insuficientemente atendidos y, en especial, los de correspondencia pública marítima, con la finalidad de garantizar la suficiencia de su oferta. (...)

3. *El reglamento que declare incluidos determinados servicios en esta categoría **deberá, además, indicar, de conformidad con lo dispuesto en el artículo siguiente<sup>3</sup>, sus formas de financiación, las Administraciones Públicas o los operadores obligados a prestarlos en virtud de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 35 y los procedimientos para su determinación.*** (...)

En cumplimiento de la previsión del artículo 40.2.b de la LGTel, el Reglamento de Obligaciones Públicas estableció lo siguiente:

**Artículo 40. Determinación de los servicios obligatorios a los que se refiere el artículo 40.2, b) de la Ley General de Telecomunicaciones.**

1. *De acuerdo con lo establecido en el artículo 40.2, b) de la Ley General de Telecomunicaciones, y a efectos de garantizar la suficiencia de su oferta por, al menos, un operador, se consideran servicios obligatorios los de líneas susceptibles de arrendamiento, **los de la red digital de servicios integrados** y los de correspondencia pública marítima.*
2. *Los servicios de líneas susceptibles de arrendamiento y **servicios de la red digital de servicios integrados** a los que se refiere este artículo se delimitarán en la Orden mencionada en el apartado 1, a) del artículo siguiente. (...).*

---

<sup>3</sup> Artículo 41. *Prestación y financiación de los servicios obligatorios (...)*

2. *En la prestación de los servicios a los que se refiere el apartado 2.b) del artículo anterior será de aplicación lo siguiente:*
  - A) *El Gobierno, mediante reglamento, designará los operadores obligados a suministrar cada tipo de servicio o, en su defecto, los criterios y procedimientos para su determinación, así como su ámbito geográfico de actuación o los procedimientos para su delimitación. (...)*
  - B) *(...) Las obligaciones se impondrán, sólo a los titulares de nuevas licencias que se otorguen tras la aprobación del reglamento. No obstante, el reglamento que imponga este tipo de obligaciones de servicio público podrá establecer su exigibilidad a los operadores ya existentes, una vez transcurrido un determinado plazo desde su implantación que, en ningún caso, podrá ser inferior a cinco años. Sin embargo, respecto de los operadores dominantes, el reglamento podrá establecer plazos más breves.*

*El Ministerio de Fomento, previo informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, desarrollará, mediante Orden Ministerial, lo previsto en este apartado. (...)*



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El propio Reglamento, en previsión de dilaciones en la promulgación de la Orden citada, establece una normativa provisional en su Disposición Transitoria Primera, especialmente en sus apartados 3 y 6<sup>4</sup>.

El apartado 3 de la citada Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Obligaciones Públicas remite, para la determinación de los servicios obligatorios a los efectos previstos en su artículo 40, a los contratos concesionales para la prestación de los servicios portadores y finales que estuvieren vigentes a la entrada en vigor del citado Reglamento. Igualmente establece que estarán obligados a tal prestación los titulares de dichos contratos. Y ello debe entenderse dentro de las obligaciones de prestación de determinados servicios derivadas del propio contrato concesional, y no del carácter obligatorio “ope legis” del servicio, en virtud del artículo 40 del ROP, puesto que dicha obligatoriedad queda supeditada a su delimitación en la correspondiente Orden ministerial, conforme lo dispuesto en el artículo 41.1 a) del propio Reglamento de Obligaciones Públicas. De este modo, mientras no se produzca la delimitación (artículo 41.1 a) del ROP) o determinación (Disposición Transitoria primera punto 3 del ROP) del servicio, su obligatoriedad queda supeditada a las estipulaciones del correspondiente contrato concesional.

Así pues, como se indica, habrá que determinar seguidamente cual es la regulación concreta de la prestación del servicio de RDSI por Telefónica, dentro del marco general que hemos señalado, y, en especial, si existen obligaciones de servicio público en tal materia.

---

<sup>4</sup> *Disposición transitoria primera. Régimen transitorio aplicable al servicio universal y a los servicios obligatorios.*

3. *Hasta la determinación de los servicios obligatorios, de conformidad con lo previsto en el artículo 40 de este Reglamento, se considerarán como tales los que se encuentren fijados en los contratos concesionales para la prestación de servicios portadores y finales, vigentes a la entrada en vigor de este Reglamento. Igualmente, hasta que se determinen los operadores obligados a su prestación, habrán de llevarlos a cabo los titulares de los referidos contratos.*
6. (...) *Asimismo, dichas obligaciones de servicio público podrán imponerse, transcurridos dos años desde la entrada en vigor de este Reglamento, a los operadores dominantes que dispongan del título habilitante con anterioridad al inicio de la vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones.*



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

### b) Los servicios de Red Digital de Servicios Integrados en el ámbito del Contrato del Estado con Telefónica y de la normativa sobre la prestación del servicio telefónico disponible al público.

Teniendo en cuenta lo anterior, y por lo que se refiere a Telefónica de España, S.A.U. (antes denominada Telefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, S.A.U.), ha de tenerse en cuenta que esta entidad, por virtud de cesión<sup>5</sup>, es hoy la entidad titular del Contrato del Estado con Telefónica de España, S.A. (hoy denominada Telefónica, S.A.), publicado en el B.O.E. núm. 20, de 23.01.92, en virtud de Resolución de 14 de enero de 1992, de la Subsecretaría de Obras Públicas y Transportes.

El citado contrato ha mantenido su vigencia tanto en la fecha de entrada en vigor del Reglamento de Obligaciones Públicas como en la actualidad (si bien se encuentra sometido a lo dispuesto en la LGTel y, en especial, en su Disposición Transitoria Octava<sup>6</sup>). De dicho contrato cabe destacar las siguientes cláusulas:

*Primera. Objeto del Contrato.-*

*El presente Contrato tiene por objeto regular la prestación en gestión indirecta, mediante concesión administrativa, por «Telefónica de España, Sociedad Anónima» (en adelante Telefónica), de los servicios finales y portadores relacionados en su cláusula tercera, de conformidad con el régimen establecido en la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. (...)*

*Tercera. Servicios concedidos.-*

---

<sup>5</sup> La cesión fue autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1998, publicado por Resolución de la Secretaría General de Comunicaciones de 10 de mayo de 1999 en el Boletín Oficial del Estado de 26 de mayo de 1999.

<sup>6</sup> Disposición Transitoria Octava. Contrato del Estado con Telefónica de España, S. A.

1. *Si, conforme al apartado 6 de la disposición transitoria primera de esta Ley, «Telefónica de España S.A.», el 31 de agosto de 1998, no hubiere solicitado la transformación de su actual concesión formalizada mediante el contrato celebrado con el Estado, el 26 de diciembre de 1991, en las correspondientes licencias individuales, se entenderá que el contenido de aquélla, en lo que no se oponga a lo dispuesto en esta Ley, continúa vigente, como título habilitante para la prestación de los servicios a los que se refiere.*
2. *A efectos de fijar el contenido de los derechos y obligaciones determinados en el citado título concesional que mantendrían su eficacia tras la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, previa audiencia a «Telefónica de España, S.A.», informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y dictamen del Consejo de Estado, adoptará el oportuno acuerdo. (...)*





## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

1. Los servicios finales de telecomunicación, cuya gestión en régimen de monopolio [suprimido por RDL 6/1996] se otorga a Telefónica, son los siguientes:
  - **Telefónico urbano, interurbano e internacional.** (...)
3. Los servicios portadores de telecomunicación, cuya gestión en régimen de monopolio [suprimido por RDL 6/1996] se encomienda a Telefónica, son los siguientes:
  - **Servicio portador soporte del servicio telefónico básico.** (...)
6. **La prestación de los servicios portadores o finales otorgados en el presente Contrato dará derecho a la Entidad concesionaria a establecer la red e infraestructura necesarias para su prestación, incluyendo el derecho al establecimiento de su propia red digital de servicios integrados, con sujeción a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones.** (...)

Conforme a lo anterior, debe considerarse incluida en el contrato entre el Estado y Telefónica el título habilitante para la prestación del servicio telefónico disponible al público, en su modalidad de Red Digital de Servicios Integrados, y para el establecimiento y explotación de la propia Red Digital. De hecho, el Acuerdo del Consejo de Ministros que autorizó la cesión a la actual Telefónica de España, S.A.U. de los títulos habilitantes para la prestación de los servicios de telecomunicaciones básicas de los que era titular la actual Telefónica, S.A., no consideró existente un título habilitante autónomo para los servicios de RDSI o para la Red precisa para ellos, sino que estableció explícitamente lo siguiente:

*"Primero. - Autorizar a "Telefónica, Sociedad Anónima", a ceder a su compañía filial, "Telefónica, Sociedad Operadora de Servicios de Telecomunicaciones en España, Sociedad Anónima", los títulos habilitantes para la prestación de los siguientes servicios de telecomunicaciones básicas en España:*

***Servicio final telefónico urbano, interurbano e internacional, en el que se incluyen** los servicios suplementarios convencionales, los servicios basados en la identificación del número llamante, los servicios suplementarios selectivos, los servicios personalizados, los servicios especiales, el servicio de tarjeta personal, los servicios de inteligencia de red (Servicios Iris), **los servicios de red integral [sic] de servicios integrados** y el servicio telefónico celular.*

***Servicio portador soporte del servicio telefónico básico.** (...)"*

En atención a lo anterior, **la prestación del servicio telefónico disponible al público mediante la Red Digital de Servicios Integrados, y el establecimiento y explotación de esta red, se vienen considerando como**





## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

**modalidades de la prestación del servicio telefónico disponible al público y del servicio portador soporte del mismo**<sup>7</sup>. Así sucede, por ejemplo, en las Ordenes sobre Tarifas dictadas por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. Es especialmente relevante lo dispuesto en la Orden de 15 de diciembre de 1995, sobre determinadas tarifas telefónicas (B.O.E. núm. 305 de 22-12-95)<sup>8</sup>, y en las sucesivas Órdenes que la han modificado, en

7

Ello es coherente con el tratamiento que a la red digital de servicios integrados se otorga en el Reglamento Técnico y de prestación del servicio final telefónico básico y de los servicios portadores, aprobado por Real Decreto de 19 de diciembre de 1997, el cual debe considerarse vigente en lo no derogado por la LGTel y sus normas de desarrollo, en cuanto a las referencias que al mismo se realizan en el título concesional de Telefónica. En primer lugar, se hace referencia a la misma en el artículo 25, que trata de los "Servicios objeto de la concesión".

1. *La concesión administrativa dará derecho a la prestación del servicio final telefónico básico y de su servicio portador, así como del servicio portador de alquiler de circuitos y de los servicios portadores de los servicios de valor añadido a través de redes terrenales o que utilicen el dominio público radioeléctrico.*
2. *La prestación de los servicios portadores o finales otorgados mediante concesión administrativa dará derecho a la entidad concesionaria a establecer la red e infraestructuras necesarias para su prestación, así como la **red digital de servicios integrados**, en los términos previstos en el artículo 17 de la Ley 31/1987, de 18 de diciembre, de Ordenación de las Telecomunicaciones. (...)*

Por otro lado, en el Artículo 40 del Reglamento, integrado en el Capítulo III, "Servicio telefónico básico", al regular los "contratos-tipo", se considera a la red digital de servicios integrados como una modalidad de abono al servicio:

1. *Las relaciones entre el abonado y el prestador del servicio se regirán por un contrato-tipo, sin perjuicio de la normativa vigente aplicable a dichas relaciones.*
2. *(...) pudiendo establecerse distintos contratos para cada modalidad de abono. En todo caso, serán objeto de contrato-tipo específico las modalidades de abono general, **red digital de servicios integrados** y conexión de equipos terminales de uso público. (...)*

Debe tenerse en cuenta que el citado contrato-tipo se considera aplicable en la normativa reciente sobre tarifas, como por ejemplo la Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1999, por la que se dispone la publicación del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de 9 de septiembre de 1999, que aprueba el programa de descuentos para el servicio telefónico cursado a través de líneas de acceso básico de la Red Digital de Servicios Integrados de "Telefónica de España, S.A.U."

8

Posteriormente, han tratado de esta materia, pero sin una incidencia relevante, las siguientes normas:

- Orden de 10 de abril de 1997, sobre la modificación sobre determinadas tarifas de Telefónica de España, S.A..
- Orden del 4 de marzo de 1998, Ministerio de Fomento, sobre modificación de tarifas de la red digital de servicios integrados, servicio de acceso digital para



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

materia de descuentos y tarifas. De las mismas cabe citar tres aspectos especialmente relevantes:

- a) Su inserción en el ámbito de las tarifas del servicio telefónico, y la existencia de remisiones a las tarifas relativas a la "red telefónica básica" (por ejemplo en cuanto al servicio medido -tráfico cursado desde o hacia la Red Digital de Servicios Integrados).
- b) El sometimiento de la prestación del servicio de RDSI únicamente a "*las disponibilidades técnicas en cada caso*"<sup>9</sup>.

Es particularmente clarificadora esta última norma (punto 2.7 de la Orden) que limita la prestación de los servicios de Red Digital de Servicios Integrados, a aquellos casos en que los mismos estén disponibles técnicamente.

- 
- centralitas, servicio de inteligencia de red y servicio telefónico básico cursado con cargo a tarjeta personal de "Telefónica de España, S.A."
  - Orden de 31 de julio de 1998, Ministerio de Fomento, sobre reequilibrio tarifario de los servicios prestados por "Telefónica, S.A."

<sup>9</sup> Esta previsión se establece en el punto 2.7 del apartado segundo de la citada Orden de 15 de diciembre de 1995, sobre determinadas tarifas telefónicas:

*Segundo.- Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) (...)*

*2.7.- Disponibilidad*

*La prestación de los servicios de Red Digital de Servicios Integrados, estará sometida a las disponibilidades técnicas en cada caso.*

Este apartado tiene su precedente en la nota al apartado 16 de la Orden de 28 de julio de 1994, y se reproduce literalmente en numerosas disposiciones sobre tarifas de la RDSI, como las citadas Órdenes de 4 de marzo y de 31 de julio de 1998.

La falta de disponibilidad técnica constituye la única causa prevista normativamente para denegar la prestación del servicio. No es posible alegar, por ejemplo, causas económicas (como el sobrecoste que puede implicar el establecimiento de accesos a la RDSI fuera de las zonas urbanas) dado que las tarifas aprobadas prevén mecanismos específicos de cuantificación de la tarifa en función del coste para aquellos casos en que existe dicho sobrecoste. Así, en especial, están establecidas tarifas de extrarradio, para el establecimiento de los accesos situados fuera de las zonas urbanas.

Cabe señalar que respecto de la Red Telefónica Básica, las tarifas de extrarradio dejaron de aplicarse prácticamente, de facto, en 1996, en virtud de la implantación generalizada de la telefonía rural de acceso celular mediante los planes de extensión del servicio. V. Nota 10 infra.



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

Esta norma es la única referencia existente en la normativa a las obligaciones de Telefónica relativas a la prestación del servicio de RDSI como modalidad de prestación del servicio telefónico disponible al público. No existe otra mención relevante con relación a obligaciones de extensión territorial del servicio tanto en el referido Contrato de Telefónica con el Estado, ni en otras normas relevantes sobre la extensión y delimitación del servicio telefónico, que no hacen una mención diferenciada de la RDSI como modalidad de prestación del servicio telefónico, y que por tanto, admiten que la obligaciones de extensión del servicio telefónico se cumplan mediante la implantación de la Red Telefónica Conmutada sin capacidades RDSI.<sup>10</sup>

En suma, no se encuentra norma alguna que imponga obligaciones concretas a Telefónica en cuanto a la prestación del servicio telefónico en su modalidad RDSI, con excepción de la regla sobre el "sometimiento a las disponibilidades técnicas en cada caso", establecidas en las Órdenes mencionadas, y la aplicación del principio de "no discriminación" contenido en el artículo 7 del Reglamento de Obligaciones Públicas. Esto es, Telefónica deberá prestar el servicio telefónico en su modalidad RDSI en todos aquellos lugares donde existan los medios técnicos para su prestación (p.e., las centrales telefónicas que estén adaptadas para ello), no pudiendo discriminar a los usuarios que lo soliciten y se encuentren en igualdad de circunstancias.

### V. RECOMENDACIONES EUROPEAS SOBRE LA RED DIGITAL DE SERVICIOS INTEGRADOS.

Partiendo de la Recomendación 84/549/CEE, en cuanto establecía la previsión de introducción de servicios que tuviesen como base un enfoque común armonizado en el ámbito de las telecomunicaciones, la Recomendación 86/659/CEE, de 22 de diciembre de 1986, relativa a la introducción de la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI) en la Comunidad Europea, viene a establecer, con carácter no vinculante y en lo que aquí interesa, una serie de definiciones de interfaz entre la red pública y red privada. En concreto, se

<sup>10</sup>

Son particularmente relevantes las siguientes normas:

- Real Decreto 2248/1984, de 28 de noviembre, sobre extensión del servicio telefónico en el medio rural.
- Resolución de 27 de abril de 1993, de la Secretaría General de Comunicaciones, por la que se dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de marzo de 1993 por el que se aprueba el Plan Operacional de Extensión del Servicio Telefónico en el Medio Rural 1993-1996.
- Real Decreto 1647/1994, de 22 de julio, por el que se delimita el Servicio Telefónico Básico.



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

distingue entre acceso básico y acceso primario para las interfaces físicas normalizadas entre los terminales RDSI y la propia red pública. A su vez, esta Recomendación establece los servicios que deben definirse y especificarse dentro del servicio RDSI en diferentes plazos, numeración, direccionamiento, señalización y consideraciones relativas a las tarifas.

Por su parte, la Recomendación 92/387/CEE, de 5 de junio de 1992, relativa a la oferta de unos mecanismos armonizados de acceso a la Red Digital de Servicios Integrados y de un conjunto mínimo de funciones RDSI con arreglo a los principios de la oferta de red abierta (ONP), establece, con carácter no vinculante, que los Estados miembros faciliten y fomenten el establecimiento de procedimientos armonizados de acceso a la RDSI para los usuarios. En desarrollo de su contenido, la Parte A del Anexo I de la Recomendación de referencia recoge los mecanismos armonizados de acceso, del siguiente modo:

### *“A.1. Mecanismos de acceso.*

*Los mecanismos de acceso afectan a las interfaces en los puntos de referencia definidos por el CCITT.*

*Acceso a velocidad básica (2B+D) en el punto de referencia S/T.*

*Acceso a velocidad primaria (30B+D) en el punto de referencia S/T.”*

Por último, hay que reseñar la existencia de una serie de Reglamentaciones Técnicas Comunes para la Red Digital de Servicios Integrados, adoptadas a través de las correspondientes Decisiones de la Comisión de las Comunidades Europeas, que establecen normas técnicas armonizadas para equipos terminales destinados a ser conectados a una red pública de telecomunicaciones que preste servicios RDSI, sin contenido relevante sobre el carácter obligatorio de la prestación del servicio.

## **V. ACCESO BÁSICO, ACCESO PRIMARIO Y DISPONIBILIDAD TÉCNICA.**

### **1. Disponibilidad técnica para el Acceso Básico (2B+D) al servicio RDSI.**

Las limitaciones técnicas para la provisión de este servicio pueden derivarse de las propias Centrales telefónicas locales, que en algunos casos no están preparadas para ofrecer RDSI (2B+D), o bien de las características del



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

par de abonado instalado. Para las Centrales que cuentan con los medios necesarios para ofrecer el Acceso Básico RDSI, la cobertura del mismo viene determinada por las características del par de abonado (que es el soporte de la tecnología de acceso en este caso) y sus limitaciones intrínsecas derivadas de parámetros técnicos tales como atenuación de la señal, frecuencia o retardo de grupo. La disponibilidad técnica en el Acceso Básico al servicio RDSI está condicionada por los parámetros citados, que van a depender principalmente del grosor del par de cobre, de la longitud de la línea, de las interferencias externas, y de la existencia o no de ramificaciones en el cable. En el caso de que la calidad de los pares de cobre y las condiciones de tendido fueran similares para todo el área de cobertura de una central, para aquellos clientes servidos por esta central se podría decir que la limitación de este tipo de acceso reside en la distancia física existente entre la ubicación del abonado y la central que presta el servicio, de modo que si el abonado se encuentra fuera del radio de cobertura de dicha central, no existiría disponibilidad técnica para la prestación del servicio RDSI a través de un Acceso Básico y, por ello, el citado servicio no tendría carácter obligatorio.

Las limitaciones técnicas a que se refiere este apartado no son insalvables, pero su superación requiere inversiones adicionales por parte de Telefónica tales como las originadas por conectar al abonado a una Central local diferente, o por llevar a cabo un nuevo tendido de cable de mayor calidad o sin ramificaciones. En función de la cuantía de estas inversiones adicionales, Telefónica toma la decisión de llevarlas o no a cabo sin repercutir el coste al abonado.

### 2. Disponibilidad técnica para el Acceso Primario (30B+D) al servicio RDSI.

Las limitaciones impuestas por la tecnología de acceso en el caso del Acceso Básico antes referido, no se manifiestan de la misma forma en el caso del Acceso Primario (30B+D). En la práctica, el radio de cobertura de la zona de servicio de una determinada central para el Acceso Primario RDSI es muy amplio, puesto que en este caso, al ser mayores las cuotas a satisfacer por los clientes y mayor el volumen de tráfico medio, Telefónica tiene más fácil el rentabilizar las inversiones que en su caso tuviera que acometer en equipos auxiliares o medios de transmisión necesarios para prolongar el tendido del par de cobre o cable coaxial hasta el domicilio del abonado. En consecuencia, la limitación técnica que impone una distancia máxima de cobertura para la central correspondiente en el caso del Acceso Básico RDSI, no existe en el caso de los Accesos Primarios. Por ello, dentro de unos márgenes de distancia



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

razonables y exceptuando el caso de clientes especialmente inaccesibles, se puede concluir que existiría disponibilidad técnica para el Acceso Primario (30B+D) al servicio RDSI con independencia de la distancia existente entre la ubicación del cliente y la central correspondiente.

### VII. CONCLUSIONES.

Conforme a todo lo expuesto, y como contestación a la consulta del Instituto de Fomento de Andalucía, puede afirmarse lo siguiente:

- I. La prestación de los servicios de telefonía disponible al público en su modalidad de Red Digital de Servicios Integrados y el establecimiento y explotación de la citada Red constituyen derechos de Telefónica de España, S.A.U., en virtud de los títulos habilitantes de que dispone en virtud del Contrato con el Estado del que es parte en virtud de cesión autorizada por Acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de diciembre de 1998.
- II. No existen en la normativa vigente obligaciones de servicio público que recaigan sobre Telefónica en relación a la extensión territorial de dichos servicios RDSI, con excepción de la regla del "*sometimiento a la disponibilidad técnica en cada caso*", establecida en las Órdenes mencionadas, y la aplicación del principio de "no discriminación" contenido en el artículo 7 del Reglamento de Obligaciones Públicas.
- III. Por tanto, Telefónica está obligada a prestar tales servicios a los usuarios que lo soliciten en todos aquellos lugares donde existan los medios técnicos para su prestación, debiéndose ajustar a los principios de no discriminación e igualdad de trato en el acceso y uso de los servicios por los usuarios, y aplicándose las tarifas aprobadas al efecto por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos.



## COMISIÓN DEL MERCADO DE LAS TELECOMUNICACIONES

El presente certificado se expide al amparo de lo previsto en el artículo 27.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y el Artículo 23.2 de la Orden de 9 de abril de 1997, por la que se aprueba el Reglamento de Régimen Interior de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, con anterioridad a la aprobación del Acta de la sesión correspondiente.

Vº Bº

EL PRESIDENTE

EL SECRETARIO

José Mª Vázquez Quintana

José Giménez Cervantes